



## Tribunal declaró la nulidad del indulto de José Enrique Crousillat

• Por haber sido concedido en base a informaciones falsas

El Tribunal Constitucional resolvió declarar la nulidad del indulto concedido a José Enrique Crousillat López Torres mediante Resolución Suprema N.º 285-2009-JUS, para cuyo efecto declaró infundada la demanda contenida en el Expediente N.º 03660-2010-PHC/TC de conformidad con lo expresado en sus fundamentos.

El Tribunal también advirtió en tanto que el habeas corpus es un proceso destinado a la protección de la libertad individual y derechos conexos, en particular la demanda no se dirige únicamente a enervar los efectos de la Resolución Suprema que se cuestiona sino, naturalmente, que se disponga la libertad del favorecido, esto es, que recobre sus efectos el indulto concedido.

Es por ello, que la sentencia no solo versa sobre la Resolución Suprema cuestionada sino también en determinar si en el caso, cabe disponer que el indulto concedido recobre sus efectos.

El indulto es una facultad del Presidente de la República reconocida por la Constitución a través de la cual, tal como lo prevé el Código Penal se suprime la pena impuesta a un condenado.

Se trata, además, de una facultad presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad, lo que no significa que se trate de una potestad que pueda ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad.



Conforme a lo expresado en la parte considerativa, el efecto de cosa juzgada del indulto no permite una revocación del mismo por parte del Presidente de la República.

Sin embargo, como quiera que el anular la Resolución Suprema N.º 056-2010-JUS que dejaba sin efecto el indulto a José Enrique Crousillat López Torres, el Colegiado en virtud del carácter objetivo de los procesos constitucionales analizó también el indulto concedido a fin de determinar si es posible que la sentencia disponga que el mismo recobre vigencia.

Al respecto, el Tribunal Suprema cuestionada dispuso dejar sin efecto el indulto concedido a José Enrique Crousillat sobre la base de «entre otras consideraciones» que los datos sobre el

estado de salud del favorecido no correspondieran con la realidad:

«Que (...) el Juez del Segundo Juzgado Penal Especial de Lima ha ordenado su ubicación y detención para su procesamiento (...) por considerar que existían indicios de inexactitud en la información relativa al estado de salud del ex recluso Crousillat López Torres».

Al respecto, el Tribunal advierte que conforme consta de acts, el Informe en mayoría de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia que recomendaba la concesión del indulto, basaba su recomendación en el presunto estado de salud del favorecido, tomando como base los informes médicos obrantes en el expediente de indulto.

Sin embargo, de un estudio del expediente se advierte que a pesar de que las recomendaciones de los miembros de la Junta Médica Penitenciaria del 19 de junio de 2009, obrante en el expediente de indulto, consistieron únicamente en que «El paciente... por los diagnósticos antes descritos requiere evaluación continua de las siguientes especialidades: cardología, neurología, hematología y endocrinología» y que «dichos controles deben darse en un establecimiento de salud que brinde dichas especialidades», el referido informe afirmó sin ninguna base fáctica que «...Los diferentes exámenes, informes y protocolos médicos han demostrado que mantendrá recluso en el Centro Penitenciario al solicitante pero en may grave riesgo su vida, quien cuenta con 76 años de edad», lo que evidentemente no se confunde con las conclusiones a las que había llegado la Junta Médica Penitenciaria.

Dicha distorsión de la real situación médica del favorecido fue recogida incluso en la resolución que concedió el indulto:

«Que en razón de su avanzada edad, por las dolencias que lo aquejan y el continuo riesgo que ve expuesta su vida, el solicitante cumple los requisitos establecidos en los literales b) y d) del artículo 22 de la Resolución Ministerial N.º 193-2007-JUS, para la concesión del indulto en razón de su avanzada edad y de sus condiciones humanitarias». El error en que se incurrió, provocado por el informe

elevado por la Comisión de indultos del Ministerio de Justicia, que incluso ha llevado a la apertura de proceso penal contra uno de sus miembros, justifica la anulación del indulto, pues como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, el goce de un derecho presupone que éste haya sido obtenido conforme a ley, pues el error jurídicamente grave no puede generar derechos (Expediente N.º 8468-2006-AA/TC, fundamento 7, 03397-2006-PA/TC, fundamento 7; 2500-2003-AA/TC fundamento 5; entre otras).

En este sentido, este Colegiado advierte que siendo la razón por la que se decidió conceder el indulto al favorecido el grave estado de salud en el que presumiblemente se encontraba, y como ha quedado demostrado, el error en que incurrió era de tal magnitud que se encontraba justificada en el caso la anulación del indulto, la demanda no puede ser estimada. Y es que si, como se ha expresado líneas arriba, el error no puede generar derecho, un indulto concedido bajo un error tan grave sobre el estado de salud torna en puramente aparente la motivación en la que se sustentó el mismo.

Por tanto, la presente sentencia no solo declara que la Resolución Suprema cuestionada fue emitida por una autoridad incompetente, sino que el indulto es nulo, por las razones expuestas.

### Procesos de inconstitucionalidad

#### ■ Ingresada

-Exp. N.º 00033-2010-P/TC  
Demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima contra la Ley N.º 29318 (Ley que modifica la Ley N.º 28901 - Ley del Servicio Diplomático) artículos 37 inciso b), 38 incisos a) y b), 18 inciso a) y la Tercera Disposición Complementaria Final y Transitoria.

### Conflicto competencial

#### ■ Ingresadas

-Exp. N.º 00003-2010-CC/TC  
Demanda interpuesta por don Isaac Molina Chávez (Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho) contra el Ministerio de Educación.

-Exp. N.º 00001-2011-CC/TC  
Demanda interpuesta por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) contra la Municipalidad Provincial de Utcubamba, Baguea Grande.

## Opiniones destacadas sobre la sentencia de Crousillat:

Presidente del Consejo de Ministros, Ing. José Antonio Chang:

«Yo creo que ratifica que el hecho de haber un procedimiento equivocado en cuanto a la evaluación médica, rectifica un error administrativo, entonces creo que estoy absolutamente de acuerdo con el Tribunal Constitucional y su fallo».



Ministra de Justicia, Dra. Rosario Fernández:

«El fallo lo que hace es reconocer, en primer lugar, el alto grado de discrecionalidad que está contenido en una decisión presidencial respecto de un indulto, a pesar de lo cual señala que tiene límites que permiten que no haya arbitrariedad. Sin embargo, reconoce el hecho de que la decisión cuando está sustentada en hechos que se comprueban que no son reales pierde peso, pierde sustento en cuyo caso puede proceder, como ha procedido en este caso, el Tribunal Constitucional advirtiéndole que el sustento del indulto era equivocado, era errada y por lo tanto fue dejado sin efecto».

Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, Dr. Elay Espinoza-Saldana:

«Con esto (la sentencia) queda claro como cada vez es más importante la labor de los espacios jurisdiccionales en general y de la justicia constitucional en particular. Sin un funcionario del más alto nivel comience un error, es inducido a un error dejemos siempre la puerta abierta a que un juez pueda corregir ese error en defensa de la Constitución y el Derecho, yo creo que en ese sentido, cumple a cabalidad la idea de que si se considera que estamos ante un indulto, su fallo dado, no debe otorgarse, haya la posibilidad de que en un espacio de judicatura, en este caso judicatura especializada, el Tribunal Constitucional pueda crear una situación para así rescatar el imperio de la ley de la Constitución».



**Editorial:**  
El indulto: ¿es revisable?

PÁGINA 2

**Jurisprudencia Constitucional:**  
El acceso a la información pública

PÁGINA 3

**Jurisprudencia Constitucional:**  
El Tribunal Constitucional precisa que puede sesionar tanto en su sede de Arequipa como en la de Lima

PÁGINA 4

**Jurisprudencia Constitucional Relevante:**  
Centrándose "CAS" si el trabajador continúa laborando el contrato se prorrogue automáticamente

PÁGINA 6

**Jurisprudencia Constitucional:**  
Requisitos para que el habeas corpus formulado por el condenado a cadena perpetua Jorge López Paredes

PÁGINA 7

**Noticias Institucionales:**  
Presidente de la República destaca labor contralora del Tribunal Constitucional

PÁGINA 8



## Columna del Director

Carlos Mesía



## El indulto: ¿Es revisable?

El indulto es una facultad del Presidente de la República reconocida en el artículo 118.21 de la Constitución Política, a través del cual, tal como lo prevé el artículo 89º del Código Penal, se suprime la pena impuesta a un condenado. Se trata, además de una facultad presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad; lo que no significa que se trate de una potestad que pueda ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad.

Además, nuestra Constitución, en el artículo 139.13 prevé que el indulto adquiere los efectos de cosa juzgada que, constituye una garantía expresamente prevista en nuestro ordenamiento jurídico la prohibición de dejar sin efecto la cosa juzgada, así como la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada (artículo 139, incisos 2 y 13 de la Constitución).

En la sentencia recaída en el caso Crousillat, quedó claro que para el Tribunal Constitucional el indulto es una potestad constitucionalmente instituida que permite al Presidente de la República intervenir a favor de un condenado y adquirir carácter definitivo. De manera que, la posterior revocatoria de lo ya concedido no resulta en principio, constitucionalmente admisible. No obstante ello, la garantía de la cosa juzgada y su inmutabilidad puede ceder ante supuestos de graves errores. Así, por ejemplo, el ordenamiento procesal de la justicia ordinaria reconoce el recurso de revisión en el ámbito penal o la cosa juzgada fraudulenta en el ámbito civil. Ello se funda en lo ya precisado por este mismo Tribunal en referida jurisprudencia, el goce de un derecho presunpe que éste haya sido obtenido conforme a ley, pues un error no puede generar derechos.

Podemos afirmar que el ejercicio de la potestad discrecional del indulto está sujeto al marco constitucional y como tal supone respetar sus límites. El error en que se incurrió, provocado por el informe elevado a la Comisión de Indultos del Ministerio Justicia, que incluso llevó a la apertura del proceso penal contra uno de sus miembros, justificó la anulación del indulto.

Finalmente, no obstante que la sentencia fue desestimatoria, el Tribunal Constitucional considera necesario reiterar que, dado que la facultad presidencial de indulto generó efectos de cosa juzgada, su revocatoria por el propio Presidente de la República resulta jurídicamente inviable. De ahí que el indulto, sin perjuicio de que aquél pueda ser controlado jurisdiccionalmente precise siempre de un estándar de motivación que posibilita un control constitucional.

Carlos Rojas Medina\*

## Solo la decisión final que se pronuncie sobre el fondo adquiere la calidad de cosa juzgada (II)

La satisfacción de este derecho tiene por finalidad que las sentencias y resoluciones judiciales no se conviertan en simples declaraciones de intención sin efectividad alguna. Ello obedece a que el ideal de justicia material, consustancial al Estado Democrático y Social de Derecho, que emerge de los principios, valores y derechos constitucionales, requiere una concreción, no sólo con el pronunciamiento judicial que declara o constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su efectivización o realización material, que se logra mediante el cumplimiento de la sentencia en sus propios términos.

Como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso "Humbly and Gracia", sentencia de fecha 13 de marzo de 1997, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías judiciales, pues "sería ilusorio que el ordenamiento

jurídico interno de un Estado contratante permitiera que una decisión judicial, definitiva y vinculante, quedase inoperante, causando daño a una de sus partes...".

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales constituye, pues, una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional y que no se agota allí, pues por su propio carácter tiene una vía expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (v.g. derecho a un proceso que dure un plazo razonable). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumple, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea puesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido (STC N.º 15-2001-AI, 16-2001-AI, 4-2001-AI, Fundamento II).

Debe resaltarse, por otra parte, que nuestro ordenamiento jurídico está fundamentado en la necesidad de asegurar el valor de la justicia. Por ello, el artículo 44º de la Constitución establece que entre los deberes primordiales del Estado se encuentra el de "promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia". La capital importancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a los jueces y tribunales a adoptar las medidas

## Jurisprudencia constitucional

## No proceden demandas constitucionales cuando existan vías igualmente satisfactorias para la protección del derecho

Como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0026-2005-PA/TC, la vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del proceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la presentación de las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al artículo 3.2º del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. Así lo reiteró al declarar improcedente la demanda contenida en el Expediente N.º 3792-2010-PA/TC, interpuesta por don Javier Asilga contra la directiva del Colegio de Abogados de Arequipa.

Sobre el particular el Tribunal ha precisado que "...tanto lo que estableció en su momento la Ley N.º 23506 y lo que prescribe hoy el Código Procesal Constitucional, respecto al amparo alternativo y al amparo residual, ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución. Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la solicitud propuesta por el demandante, esta no es la excepción del amparo que, constituye un mecanismo extraordinario" (Exp. N.º 4196-2004-AA/TC, F.º).

El Tribunal señala que en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales los corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138º de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.

Postulaba que, sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo debe tenerse presente que todos los juicios se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a la ley N.º 138º.

En tal virtud, precisa que en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la tutela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, sea posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tutela de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y el igualmente idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso.

El Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 546.6º del Código Procesal Civil dispone que se tramitan en proceso sumario aquellos asuntos que no tienen una vía procedimental propia, son insusceptibles en derecho o hay dado sobre su monto o porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el juez inaceptable atendiendo su amparo.

A juicio del Tribunal Constitucional el recurrente no ha justificado la necesidad de recurrir al proceso de amparo incoado como vía de tutela urgente e idónea, y por el contrario estima que los autos presuntamente lesivos pueden ser perfectamente cuestionados en la vía ordinaria a través del proceso sumario antes referido. Dicho pronunciamiento constituye una "vía procedimental específica" para la remoción del presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la demanda, y a la vez, resulta también una vía "igualmente satisfactoria", respecto al "mecanismo extraordinario" del amparo, razón por la que la controversia planteada debió ser discutida en el referido proceso.

En consecuencia, el Tribunal estima que la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del artículo 5.2º del Código Procesal Constitucional, toda vez que el demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la protección de los derechos constitucionales presuntamente lesionados, que es igualmente idóneo para tal fin, y por ende debe acudir a él.

necesarias y adecuadas para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la parte vencida al cumplimiento oportuno de los fallos judiciales. El profesor González Pérez (Manual de Derecho Procesal Administrativo. Madrid: Civitas, 2001, 3ª edición, p. 425) enfatiza que la administración de justicia no sería efectiva si el mandato de la sentencia no fuera cumplido.

En atención a lo precedentemente expuesto, se afirma que el cumplimiento de los mandatos judiciales en sus propios términos debe llevarse a cabo de forma inmediata, a fin de garantizar una tutela adecuada a los intereses e derechos afectados de los justiciables. El incumplimiento inmediato de un mandato judicial, por el contrario, puede afectar no solo a quien es la parte vencedora en el proceso (esfera subjetiva), sino también afectar gravemente a la efectividad del sistema judicial nacional (esfera objetiva), por lo que serviría posar por un largo y muchas veces tedioso proceso, si, al final, a pesar de haberlo ganado, quien está obligado a cumplir con el mandato resultante, no lo cumple; por ello, en tales circunstancias, estaríamos frente a un problema real que afectaría por ser el derecho fundamental a la ejecución de los pronunciamientos judiciales, contenido de la tutela judicial efectiva.

\*Miembro de la Red Iberoamericana de Comunicadores del Sector Justicia.

## Jurisprudencia constitucional relevante

### Tribunal precisa que acceso a la información pública esta vinculado a uno de los contenidos protegidos por libertad de información

El Tribunal Constitucional precisó que el derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el inciso 5) del artículo 2.º de la Constitución de 1979, y es enunciado como la facultad de "...solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional".

Este derecho también está reconocido en el artículo 13.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Claudio Reyes vs. Chile*, del 19 de septiembre del 2006, fundamento 77:

Así lo señaló al declarar fundada la demanda de habeas data N.º 10524-2009-PHC/TC, interpuesta por doña Margarita Del Campo Vargas contra la Fiscalía de la Nación referida a la expedición de copias certificadas del acta de investigación formulada por la magistrada Ana María Arango Rodríguez, ordenando que se entregue a la recurrente, previo pago que suponga el pedido, copias certificadas del descargo efectuado por la magistrada Superior de Lima, doctora Arango Rodríguez, en la investigación N.º 1678-2007-Lima, previniendo a los Fiscales integrantes de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público para que eviten volver a incurrir en las acciones u omisiones ilegítimas que originaron el presente proceso.

Conforme a la doctrina del Tribunal, corresponde la demanda en los fundamentos 4 y 5 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 02579-2003-IDH/TC ("...el derecho de acceso a la información pública se refiere al estrechamente vinculado a uno de los contenidos protegidos por la libertad de información. Y al igual de lo que sucede con esta

última, debe indicarse que el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión...").

Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenecen al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. A través de este derecho se posibilita que los individuos, aisladamente considerados, puedan tener, de manera libre, su proyecto de vida, pero también el pleno ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales.

Desde esta perspectiva, en su dimensión individual, el derecho de acceso a la información se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, por mencionar alguna.

En tanto que desde su dimensión colectiva el derecho de acceso a la información pública garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática. Así, desde este punto de vista, la información sobre la manera como se maneja la cosa pública termina convirtiéndose en un

auténtico bien público o colectivo, que ha de estar al alcance de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la plena eficacia de los principios de publicidad y transparencia de la Administración Pública, en los que se funda el régimen republicano, sino también como un medio de control institucional sobre los representantes de la sociedad; y también, desde luego, para instar el control sobre aquellos particulares que se encuentran en la capacidad de poder inducir o determinar las conductas de otros particulares o, lo que es más grave en una sociedad como la que nos toca vivir, su misma subordinación. En consecuencia, la obligación de entrega de las copias solicitadas le corresponde a la Fiscalía de la Nación como representante del Ministerio Público.

### Declaran fundada demanda de habeas corpus sobre plazo de prescripción de la acción penal

Mediante sentencia recaída en el Expediente N.º 05922-2009-PHC/TC, el Tribunal Constitucional declaró fundada el Habeas Corpus interpuesto por don Luis Herrera Romero al haberse acreditado la afectación de los derechos a la libertad individual y al plazo razonable; en consecuencia, dispone que la Sala emplazada emita la resolución que correspondiere conforme a lo expresado en los fundamentos de la presente sentencia.

En el presente caso, el recurrente expresa que los emplazados han desistido su excepción de prescripción pese a que el plazo establecido por ley ha transcurrido en exceso. El artículo 80.º del Código Penal señala que "La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. Asimismo, el artículo 81.º del mismo cuerpo legal dispone que: "La prescripción de la acción se intermite por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido (...). Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el

tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción". Se observó en el expediente que el recurrente es procesado por el delito de falsificación de documentos, sancionado con pena privativa de libertad máxima de 10 años conforme lo establece el artículo 427.º del Código Penal.

El demandante se encuentra procesado por haber participado en la adulteración de una letra de cambio, título valor que fue entregado a los agravados el 1.º de marzo de 1995. Conforme se expresa en la resolución de fecha 15 de julio de 2008, que confirma la desistimiento de la excepción de prescripción, es la referida fecha la que se debe considerar como fecha de comisión del delito. Entonces el plazo prescriptorio recién empezaría a computarse desde el 1.º de marzo de 1995, fecha en la cual se entregó la letra de cambio falsificada, por lo que en consonancia con el artículo 427.º aludido, concordado con los artículos 80.º y 81.º del mismo cuerpo normativo, el plazo ordinario sería de 10 años; y el extraordinario, de 15 años. Sin embargo, a la fecha los plazos señalados han transcurrido en exceso, habiéndose afectado el derecho al plazo razonable del recurrente.

### Tribunal anula sentencia que impedía investigación fiscal a los familiares de los Sánchez Paredes

El Tribunal Constitucional resolvió declarar infundada la demanda de habeas corpus a favor de la familia Sánchez Miranda. El TC conoció este proceso a través del recurso de agravio constitucional contenido en el Expediente N.º 3987-2010-PHC/TC formulado por el Procurador del Ministerio Público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reo en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima que había declarado fundada la demanda y ordenó el archivo definitivo de la investigación fiscal.

Al mismo tiempo el Tribunal resolvió declarar la nulidad de la resolución expedida por la anotada Sala Penal y de todo lo que de ella se deriva, quedando sin efecto el archivamiento de la investigación dispuesto en la resolución.

La desistimiento decretada en el presente caso implica la revocación de la sentencia expedida en segunda instancia que declaró fundada la demanda, así como lo dispuesto en el sentido de decretar el archivo definitivo de lo actuado.

Al respecto, ya en Resolución expedida por el Pleno del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N.º 3689-2008-PHC/TC (fundamento 19) se estableció que la reparación de la violación al plazo razonable del proceso no puede ni debe significar el archivo definitivo del proceso penal como si de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario.

Sino que más bien, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, lo que corresponde es la reparación in natura por parte de los órganos jurisdiccionales, que consiste en emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, lo que ha sido reiterado por este Colegiado para los casos de plazo razonable en investigación preliminar en la sentencia recaída en el Expediente N.º 2748-2010-PHC/TC (fundamento 12) y en la sentencia recaída en el Expediente N.º 3245-2010-PHC/TC, referida a la misma investigación preliminar que se cuestiona en el caso de autos.

Por tanto, habiéndose dispuesto en la sentencia recurrida el archivo de la investigación, la sentencia del TC al revocarla deja sin efecto el archivamiento.





## Jurisprudencia constitucional

### Rechazan hábeas corpus a favor de César Gutiérrez procesado en el llamado caso DISCOVER PETROLEUM

**-Actuación del fiscal no postulatoria y no decisoria sobre lo que resuelve la judicatura**

El Tribunal Constitucional resolvió declarar improcedente la demanda de hábeas corpus contenida en el Expediente N.º 0004-2010-PHC/TC, interpuesta a favor de don César Felipe Gutiérrez en cuanto al cuestiono que cuestiona la denuncia fiscal, integrada afectando los derechos del actor en sede fiscal, que se habría concretado con la emisión de la cuestionada denuncia penal.

El TC considera que corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el inciso 1 del artículo 5.º del Código Procesal Constitucional, toda vez que no se incurriría las actuaciones fiscales de manera directa, negativa y concreta en el derecho a la libertad personal, su examen constitucional excede el objeto del proceso de hábeas corpus.

Al respecto cabe destacar que el Tribunal viene subrayando en reiterada jurisprudencia que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y no resultan decisoria sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. STC 07961-2007-TC y STC 00570-2007-PHC/TC, entre otras), pues las actuaciones fiscales no requieren a los jueces que juzgan, resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad individual (Cfr. RTC 00475-2010-PHC/TC).

Asimismo, se declaró infundada la demanda en lo que respecta al cuestionamiento constitucional de la motivación del auto de apertura de instrucción. En el presente caso se advierte que el órgano judicial demandado ha cumplido con la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, adecuadas a las condiciones legales de la materia, al expresar en los fundamentos que sustentan el auto de apertura de instrucción la suficiente argumentación objetiva y razonable para determinar el inicio del proceso penal en contra del demandante como presunto cómplice primario de los delitos de negociación incompatible y de cobheo pasivo propiamente.

Esto es, la descripción suficiente de los hechos considerados punibles que se le imputan, su presunta participación y el elemento probatorio en que se fundamenta al señalar que: "L... César Felipe Gutiérrez Peña [presidente de PETROPERU] (...), con motivo del proceso de selección N.º PERUPETRO-C-0007-2008,



corroboró por PERUPETRO S.A. para la contratación de áreas, en la modalidad de contrato de Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos, en que se otorgó la buena pro de cinco lotes al consorcio DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL AS, lo que perjudicó a la realización del hecho punible, sin el cual no se habría perfeccionado, pues la empresa noruega DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL AS... fue asociada con la empresa estatal peruana PETROPERU S.A., y así logró ganar la buena pro en 05 lotes para cuyo efecto habrían pagado sobornos (...)"

Del mismo modo el auto de apertura señala que: "... el denunciado de iniciales R.A., L.A., en contacto con su codenunciado (...), JESÚS FELIPE GUTIÉRREZ PEÑA, Presidente de PETROPERU S.A., (...) con quien se cobuló para el otorgamiento de la buena pro a la empresa DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL AS., cuyos negociados han sido registrados en los sendos minutos (...)" [58]; argumentación fáctica que no resulta inconstitucional in tanto que describe mínimamente los hechos imputados, a efectos de sustentar la cuestionada apertura de la instrucción penal en contra del actor, pues se debe recordar que la instrucción se inicia por indicios suficientes de la conducta del imputado que el juzgador considera como constitutiva de un ilícito penal. Por lo demás cabe recordar que corresponde al juzgador penal dilucidar la responsabilidad o inocencia del actor por los hechos imputados dentro de un proceso en el que se respeten las garantías del debido proceso.

### Se desestimó demanda de ex militar que alegaba persecución luego de haber sido absuelto por mismos hechos en el fuero militar

**-Fuero militar no es competente para conocer delitos comunes**

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de hábeas corpus formulada por un ex militar en el Expediente N.º 01674-2010-HC/TC, solicitando que se anulen todos los actos emitidos por el Tercer Juzgado Penal de Huancayo y la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por ser objeto de persecución múltiple, por los mismos hechos, ante el fuero militar donde fue absuelto.

El TC se ha pronunciado respecto del concepto de delito de función, señalando en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0004-2010-PHC/TC que se trata de infracciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en las que la conducta que se le imputa debe haber sido cometida con ocasión de actos de servicio.

Sin embargo, no todo acto cometido por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales durante el servicio configura

delito de función. La sentencia precluida determinó la exigencia de que la infracción afecte "L... bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento legal, y que se relacionen con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se les encargan". En el expediente penal se advierte el auto de apertura de instrucción del 20 de febrero de 2003, por el que se le abre instrucción penal al actor, Humberto Muñoz por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculato, dictándosele mandato de detención.

Si bien este proceso penal trata de los mismos hechos respecto al delito de fraude que fue materia de un proceso en el fuero penal militar, el delito de fraude, conforme a lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0017-2003-AI/TC, no entraña infracción a un bien jurídico militar, toda vez que los hechos que sustentan dichos imputaciones constituyen a recursos del Estado Peruano y también a terceras personas

proveedoras (no militares) de diversos bienes para la construcción del asfado en las calles de Huancayo, tipificados en el Código Penal como delitos contra el Patrimonio y contra la Administración Pública.

En tal sentido, al no configurar delito de función los hechos que se imputan al recurrente, no resultó competente el Fuero Militar para conocer el citado ilícito, por lo que este fuero no se encuentra facultado constitucionalmente para ejercer función jurisdiccional respecto al procesamiento de dichos comunes.

En cuanto a la alegada falta de motivación, en el presente caso tanto el auto de apertura de instrucción como el auto ampliatorio de instrucción se encuentran motivados; es así que se especifica la respectiva parte del artículo 9.º del Código Penal que corresponde a la actuación del recurrente en la comisión del delito de peculato; además se describe la conducta ilícita que se le atribuye, por lo que para el Tribunal el recurrente no puede alegar el desconocimiento de los cargos que se le imputaron en su contra.

### Tribunal señala que el tener una familia y no ser separado de ella es un derecho constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el derecho del niño a tener una familia como un derecho constitucional implícito que encuentra sustento en el principio-derecho de dignidad de la persona humana y en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar consagrados en los artículos 1.º, 2.º, inciso 1) de la Constitución. Así lo ha señalado al declarar fundada la demanda de hábeas corpus N.º 02392-2010-PHC/TC, interpuesta por la madre del menor con iniciales L.F.H., contra el padre del niño sobre la tenencia, y que según una transacción extrajudicial, le corresponde a él; ordenando que el padre entregue de manera inmediata, al menor a su madre, bajo apremio de aplicarse las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional de ser denunciado por delito de resistencia a la autoridad.

Se trata de un derecho reconocido implícitamente en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual "el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión", así como en el artículo 9.1, que establece que "los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos", derecho reconocido también expresa en el artículo 8.º del Código de los Niños y Adolescentes, que señala que "el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia".

Asimismo, el TC ha reconocido que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye una manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser separado de ella, y que aun cuando los padres están separados de sus hijos impone que la convivencia familiar deba estar garantizada, salvo que no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar; y que la autoridad que se le reconoce a la familia no implica que ésta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño, que pudiera generar un daño para su bienestar, desarrollo, estabilidad, integridad y salud.

En este sentido, el niño necesita para su crecimiento y bienestar del afecto de sus familiares, especialmente de sus padres, por lo que se debe considerar y seguirse sin que existan razones determinantes en función del interés superior de aquel, entorpecer su crecimiento y puede suprimir los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral, así como generar la violación de su derecho a tener una familia. (Cfr. Exp. N.º 1817-2009-BC, fundamentos 14-15).

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional, sobre la base del derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, reconocido en el Principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, que establece que "el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita de amor y comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y material", ha entendido que el Estado, la sociedad y la comunidad tienen la obligación de cuidar, asistir y proteger al niño para promover que tenga un nivel de vida adecuado y digno para su desarrollo físico, psíquico, afectivo, intelectual, ético, espiritual y social.

Así, la eficacia de este derecho pone de relieve la importancia de las relaciones parentales, toda vez que los padres son los primeros en dar protección y amor a sus hijos, así como en satisfacer sus derechos. Sin embargo, ello no puede impedirle ni restringirle su derecho a mantener de modo regular relaciones personales y contacto directo con el padre separado. En este sentido, el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Partes tienen el deber de "mantener" el derecho del niño que está separado de uno de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Al respecto es necesario precisar que el deber de respeto referido no sólo debe ser cumplido por el Estado, sino también por la familia, la sociedad y la comunidad. (Cfr. Exp. N.º 1817-2009-BC, fundamentos 18-20).





### Jurisprudencia constitucional relevante

**CAS: Si el trabajador continúa laborando el contrato se prorrogará automáticamente**

**E**l Tribunal Constitucional considera que el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se promueve en forma automática si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último Contrato Administrativo de Servicios. Fue hecho el pronunciamiento en el caso de la demandante, quien alegó que el CAS se convirtió en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5.º del Decreto Supremo N.º 075-2000-MTC prescribe que la "duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación". Así lo previó al declarar infundada la demanda de amparo interpuesta por doña Jacqueline Del Pilar Sernaño Gutiérrez (Exponente N.º 03405-2010-PA/TC).

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Jefe de la Oficina Zonal de Ayacucho del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y contra el Director Ejecutivo con el objeto que se ordene la reposición en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que la demandante, a pesar de haber suscrito contratos civiles, en los hechos prestó servicios bajo una relación laboral a plazo indeterminado.

Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PJ/TC y 03818-2009-PA/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparatorio contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del Contrato Administrativo de Servicios guarda conformidad con el artículo 27.º de la Constitución.

Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió la demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del C.A.S. que es constitucional.

Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que con los contratos administrativos de servicios, obrantes de folios 4 a 12 de autos, queda demostrado que la demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que debió culminar al vencerse el plazo contenido en el último contrato administrativo de servicios suscrito por las partes, esto es, el 30 de junio de 2009.

Sin embargo, en la demanda se alega que ello no hubiera sucedido, por cuanto la demandante ha venido laborando después de la fecha de vencimiento del plazo de su último contrato administrativo de servicios. Este hecho se encontraría probado con el Acta de Constatación del Ministerio Público, de fojas 127, en el que se lee que la actora ha laborado 2 días sin contrato.

Al respecto, cabe reconocer que las consecuencias de este hecho (trabajar después de la fecha vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios) no se encuentran previstas en el Decreto Legislativo N.º 1057 ni en el Decreto Supremo N.º 675-2008-PCM, es decir, que se está ante una laguna normativa que debe ser completada por las reglas del régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios.

Por lo tanto, cuando se termina la relación laboral sin que se presente alguna de las causas de extinción del contrato administrativo de servicios, se genera el derecho a percibir la indemnización prevista en el numeral 13.3 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM. En el presente caso, como la extinción del contrato administrativo de servicios se produjo antes de que se publicara la STC 01818-2009-PA/TC, no resulta aplicable la interpretación efectuada en el segundo punto resolutorio de la sentencia mencionada.

### Informative Mensual

**DIRECTOR GENERAL**  
Carlos Mesa Ramírez  
Presidente del Tribunal Constitucional

## Investigaciones fiscales no son de acceso público

- Su acceso puede interferir con la reserva del caso

**E**l Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de hábeas data, contenida en el Expediente N.º 02346-2010-PHD-TC, interpuesta por una ciudadana contra la Fiscal de la Nación, Gladys Echeiza, para que se le entregue la información sobre las investigaciones fiscales respecto de informaciones periodísticas relacionadas con el alquiler del avión para la fuga de Vladimir Morozov y la participación del señor Dimasio Romero en relación a presunto ilícitos, por cuanto la demandante no es acreditado que las investigaciones referidas han dado lugar a procesos judiciales concluidos.

De la revisión del expediente, específicamente de lo sostenido en la demanda se aprecia que la recurrente solicita a la Fiscal de la Nación, que entregue copia simple de las investigaciones fiscales en torno a lo manifestado por el señor César Hildebrandt en el diario "La Primera", de fecha 4 de marzo del 2009, posteriormente solicita a la Fiscal de la Nación la entrega de copia simple de las investigaciones fiscales a lo publicado por el señor Humberto Campodónico en el diario "La República", de fecha 11 de abril del 2009.

En suma, se infiere que lo que pretende la **reclamante** con su demanda es obtener información sobre las investigaciones fiscales a las que hubieren dado lugar los artículos de los señores Humberto Campodónico y César

Hildebrandt publicados en el diario "La República" y "La Primera", respectivamente, referidas a una entrevista realizada al señor Dionisio Romero, de donde a su juicio, se desprenderían elementos suficientes de hechos delictivos que ameritarían una investigación fiscal.

La revisión de los actuarios se aplica que la recurrente no acredita que las investigaciones referidas han dado lugar a procesos penales concluidos, información indispensable para el otorgamiento de la orden de aprehensión en concordancia con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo 15-B, inciso 4, señala que "El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido cuando el otorgamiento de la misma implique alguno de los siguientes: "La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicación pudiera revelar la estrategia a adoptar en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información generada por el sector penal que, de divulgarse, afecte el debido respeto de su autor(s)".


**Excepción termina al concebir el precepto.** En su sentido, establecida la excepción y no apreciándose de cuál es el estado del proceso, a fin de dilucidar si la personación puede ser otorgada, la presente, el precepto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 15-B, inciso 4) del Código Procesal Constitucional,

## Tribunal desestimó demanda de empresa que pretendía exoneración del impuesto predial

**M**ilitante del Interior la suela en el Expediente N.º 03625-2009-PA/TC, interpuso por la empresa de Construcción Eléctrica San Gabriel contra la Municipalidad del Tumbes San Gabán-Puno, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo, la demanda fue denegada por la presunta violación de sus derechos constitucionales, solicitando la nulidad e ineficacia legal de los y/o cualquier acto de coerción y cobramos sobre los bienes de su propiedad que su dueños del procedimiento de ejecución sucesiva en su contra por parte de la Intendencia.

De modo que aunque el copalmeño se puede aporrear citadamente en lo que realmente pretende la demandante es que mediante el proceso de amparo se le devuelva como persona jurídica plena del pago del impuesto predial por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000, 2001 y 2002, por lo que su preparación de los predios sobre los cuales se construyeron las plantas ricoteras de su propiedad. Solicita la demandante que como correlato de esta devolución se le haya restituido sus derechos establecidos en el artículo 74 de la Constitución de la República de Colombia, en particular el artículo 112 de la Ley 70 de 1993.

También puede apreciarse que la empresa ha implementado varios procedimientos y procesos internos para la implementación de sus actividades.



pago a la Municipalidad Distrital de Otazco (período 2004-2007), estando pendiente de pago al periodo 2008, y con relación a la Municipalidad Distrital de San Gabriel, se va a proceder a realizar el pago del impuesto predial por los ejercicios 2003 al 2008, por lo que resulta innecesario proseguir con dichos procesos."

Del análisis del presente caso, el Tribunal considera que los hechos sobre los que recae el impuesto pueden ser edulcorados, falsos y permanentes que surgen parte de la Central Hidroeléctrica Nor-Cabán, que han sido tratadas con recursos propios de la demandante e integran su patrimonio, teniendo, por tal razón, la calidad de contribuyente del impuesto predial. Es decir, la interpretación de los artículos bajo análisis permite evidenciar que no sólo los propietarios de los predios son los sujetos pasivos del impuesto predial, sino que, además, el contribuyente puede ser el propietario de un inmueble que no es suyo, como sucede en la configuración de cada punto en concreto.

En consecuencia, la municipalidad demandada acotadamente y dentro del marco de las atribuciones establecidas a los gobiernos locales en el citado artículo 74.<sup>o</sup> de la Constitución, le otorgó la calidad de sujeto pasivo del impuesto predial, por lo que la demanda debe ser desestimada.

Una vez dilucidada la cuestión principal, debe establecerse claramente que la discusión relativa a si los productos están dentro de la jurisdicción del municipio de Candelario o de los distritos de Ayapango y Olancha, es una cuestión que deberá ser resuelta en la vía y forma legal pertinentes, ya que el proceso de amparo, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 9° del Código Procesal Constitucional, es una vía carente de efectos preconstitucionales.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú  
N.º - 2009-05639  
Colaborador: Giancarlo Cresci  
Diagramación: Mariela Franco  
Año 3 - N.º 23, enero 2011 - Tapa: 10.000 ejemplares

**EDICIÓN Y REDACCIÓN**  
Oficina de Imagen Institucional del  
Tribunal Constitucional

## Jurisprudencia constitucional

### Desestiman demanda de hábeas corpus formulada por el condenado a cadena perpetua Jorge López Paredes



**E**l Tribunal Constitucional decidió declarar improcedente la demanda de hábeas corpus formulada por don Jorge López Paredes, respecto a la vulneración del plano de detención provisional e influida en lo relativo a la vulneración de los derechos a la vida, a la libertad ambulatoria, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la motivación del auto de apertura de instrucción con mención expresa de la ley aplicable y derechos conexos. Así lo señaló en la sentencia recaída en el Expediente N.º 02348-2010-PHC/TC.

El Tribunal, precisa que en el presente caso se observa que en la resolución cuestionada si se han precisado los elementos de juicio reveladores de la existencia de toda una red de personas dedicadas a la ilegal actividad del tráfico ilícito de drogas en el interior del país así como en el ámbito internacional, presumiéndose una organización delictiva que está dirigida por los hermanos López Paredes, así como que se individualizó la conducta del demandante en la realización del hecho delictivo y la calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado hechos descriptos y tipificados dentro de los tipos penales 296-A, 296-B y 297 inciso primero, segundo párrafo del Código Penal.

En consecuencia, no se aprecia del contenido del auto de apertura de instrucción, la falta de motivación sin que se haya hecho mención expresa de la ley aplicable, por lo que la alegada falta de motivación debe desestimarse.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal considera pertinente señalar que la sentencia emitida por la Sala Penal Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, el 2 de agosto de 2000

menciona "que respecto al fundamento de la defensa en el sentido de que la norma aplicable al caso no estaba vigente a la fecha de la comisión de los hechos, no es cierto porque conforme aparece de autos el delito se descubrió el 9 de enero de 1995 y el tipo penal 296-A se incorporó al Código Penal el 9 de abril de 1992 según Decreto Ley 25428; [...]".

Además, en reiteradas Ejecutorias la Sala Suprema Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas que ha resultado situaciones similares que el ilícito instruido tiene la calidad de delito continuado y se denuncia, investiga y sanciona desde cuando se descubre el hecho y no desde cuando se inicia aquel. Asimismo, señalar que tiene el agravante de ser el jefe o cabecilla de la organización tal como el mismo lo señala y admite en su declaración jurada.

Respecto de la imposición de la cadena perpetua, ello también está de acuerdo a ley, pues la Ley N.º 26223, publicada el 21 de agosto de 1993, modificó el artículo 296-B, señalando que "el que interviene en el proceso de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas [...] será reprimido con pena de cadena perpetua".

En la referido a que la duración del plazo de la detención provisional habría transcurrido en exceso según lo estipulado en el artículo 137.º del Código Procesal Penal; de los instrumentales y demás actuados que obran en los autos, se aprecia que el beneficiario fue sentenciado por la Sala Penal Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, el 2 de agosto de 2000, a cadena perpetua como autor del delito contra la salud pública tráfico ilícito de drogas (artículos 296-A, 296-B y 297, inciso primero, segundo párrafo, del Código Penal).

### Se declara improcedente hábeas corpus porque en realidad lo que se pretendía era renovación de licencia

**E**l Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de hábeas corpus (Expediente N.º 04109-2010-PHC/TC) interpuesta por don Onésimo Pérez Núñez, en representación de los socios y colegas de trabajo de la empresa EMITRAPEZA SAC, y la dirige contra el Jefe del Área de Transportes de la Municipalidad Provincial de Chota (Cajamarca) por amenaza a su derecho al libre tránsito; refiere que la empresa brinda servicio de transporte de pasajeros y que el empleado, argumentando una reubicación, ha dejado sin efecto la autorización provisional.

Del análisis del peticionario y de los fundamentos fácticos que sustentan la demanda se advierte que si bien se invoca amenaza al derecho a la libertad de tránsito, lo que en realidad está en discusión es la revocación de la autorización provisional con que contaba la



empresa para el embarque y desembarque de sus pasajeros; observación que está vinculada a las facultades que tienen las municipalidades para regular el tránsito y transporte público y que en sí misma no constituye ninguna amenaza ni vulneración al derecho al libre tránsito.

## Oráculo jurídico

1. ¿Existe alguna relación entre la interpretación constitucional y el derecho internacional?  
Los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado peruano. Tal interpretación conforme con los tratados sobre derechos humanos contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos separados de protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (STC 00218-2003-HC/TC, fundamento 2).
2. ¿Cómo se interpreta la Constitución?  
La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 51.º), como desde el subjetivo-institucional (artículos 38.º y 45.º). Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier modo, sino asegurando su proyección y concreción, de manera tal que los derechos fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1.º de la Constitución). (STC 00030-2005-P/TC, fundamento 40).
3. ¿Existe una pluralidad de intérpretes de la Constitución?  
Si bien es cierto todos interpretamos la Constitución (los ciudadanos cuando ejercitan sus derechos, el Poder Legislativo cuando legisla, la Administración y el Poder Judicial en los diferentes casos concretos que deben resolver, etc.), sin embargo, la Norma Suprema ha establecido que los intérpretes especializados de esta sean los jueces ordinarios (artículo 138.º) en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera), y que en definitiva, como Supremo Intérprete de la Constitución se encuentre el Tribunal Constitucional (artículo 201.º). El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, artículo 204.º: la sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial y al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto, entre otros). (STC 00005-2007-P/TC, fundamento 24-28).
4. ¿Qué se entiende por el principio de concordancia práctica?  
La virtud del principio de concordancia práctica del apear tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta "optimizando" su interpretación, es decir, sin "sacrificar" ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, se encuentra subordinado a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana. (STC 05854-2005-PA/TC, fundamento 12.b).
5. ¿Qué se entiende por el principio de corrección funcional?  
El principio de corrección funcional supone exigir al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no devorará las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado. (STC 05854-2005-PA/TC, fundamento 12.c).
6. ¿Qué se entiende por el principio de fuerza normativa de la Constitución?  
Conforme al principio de fuerza normativa de la Constitución la interpretación constitucional debe encontrarse como vehículo a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, al propio Tribunal Constitucional) y a la sociedad en su conjunto. (STC 05854-2005-PA/TC, Fundamento 12.e).
7. ¿Qué se entiende por el principio de función integradora?  
Conforme al principio de función integradora el "producto" de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido si la misma contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad. (STC 05854-2005-PA/TC, Fundamento 12.d).
8. ¿Qué se entiende por el principio de unidad de la Constitución?  
El principio de unidad de la Constitución se refiere a que la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un "todo" orgánico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema de la sociedad en su conjunto. (STC 05854-2005-PA/TC, Fundamento 12.a).

## Noticias institucionales



**Presidente de la República destaca labor contralora del Tribunal Constitucional**

El Presidente Constitucional de la República, doctor Alan García Pérez, destacó la labor que cumple el Tribunal Constitucional (TC) afirmando que el control constitucional es fundamental en democracia para evitar el retorno de las tendencias monárquicas que siempre están latentes en la vida republicana del siglo XIX y del siglo XX, afirmando que "la peor de esas monarquías es la monarquía participocrática que conduce al desorden", precisó. El primer mandatario señaló que, "hoy sabemos que el control de todas las instituciones es lo que caracteriza a la democracia, y en la medida que todos somos, a nuestro turno, controlados, todos somos iguales".

Así lo sostuvo durante su discurso en la ceremonia de *Apertura del Año Jurisdiccional 2011*, realizada en el patio principal del TC, a la que asistieron el primer Vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas; el presidente del Congreso de la República, César Zamata Flores; el presidente de la Corte Suprema de la República, doctor César San Martín Castro; el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Benavides; el ministro de la Producción, Jorge Villante Arambur; la ministra de Justicia, doctora Rosario Fernández; la Defensora del Pueblo, doctora Beatriz Merino; la jefa de la ONPE, Magdalena Chu; el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Edmundo

Pelaez Bardales; congresistas de la República, autoridades civiles militares, diplomáticas, entre otros distinguidos invitados.

En la ceremonia prestaron juramento el presidente del TC, Carlos Mesía Ramírez, el vicepresidente, Ernesto Álvarez Miranda y el director del Centro de Estudios Constitucionales, Gerardo Ito Cruz. En el acto También fue distinguido con la medalla "José Faustino Sánchez Carrión", el constitucionalista Domingo García Belaúnde, por su destacada labor en el ámbito profesional, académico así como por la defensa y difusión de los principios y valores del constitucionalismo peruano.

A su turno el magistrado Juan Vergara Gotelli, en su discurso de orden, manifestó que el Tribunal Constitucional ha realizado una ardua labor en los últimos años, pero poco comprendida, precisando que el control que realiza el TC se hace dentro de los cauces de la Constitución. "El Tribunal es el que define la Constitución y lo que quiere decir", puntualizó.

Por su parte el presidente del TC, Carlos Mesía, destacó que este Órgano de Justicia Constitucional ha adquirido una importante presencia pero aún incomprendida, pero que cada vez será más difícil que voces autoritarias lo desaparezcan.

## Presidente de la Corte Constitucional de Corea sostuvo reunión con magistrados del Tribunal Constitucional del Perú



Una delegación de la Corte Constitucional de Corea, encabezada por su presidente, señor Lee Kang-Kook, realizó una visita protocolar para intercambiar experiencias con los magistrados del Tribunal Constitucional del Perú (TC), así como fortalecer las relaciones entre los Órganos de Justicia Constitucional de ambos países.

En la reunión, que se realizó el 25 de enero en la Sala de Audiencias del TC, estuvo presente el presidente del Tribunal Constitucional del Perú, magistrado Carlos Mesía, quien estuvo acompañado del Vicepresidente Ernesto Álvarez y los magistrados Juan Vergara, Ricardo Beaumont, Fernando Calle, Gerardo Ito y Oscar Urvilla. Junto al señor Kang-Kook asistieron su esposa, señora Kim Myong Won; los jueces de la Corte Constitucional coreana, señores Kim Jin Wook y Jeon Sang Hyeon; señor Byung Kil Han, embajador de Corea en el Perú y la señora Sooh Ah Yoo, agregada cultural.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del magistrado Carlos Mesía quien manifestó que es un honor y una gran satisfacción tener en el Tribunal Constitucional del Perú al titular y demás representantes de la Corte Constitucional de Corea, una de las Cortes más importantes del mundo.

## Centro de Estudios Constitucionales

### Anuncia programación de Diplomas y Cursos para el año 2011

En el marco de su Plan Operativo Anual, el CEC ha diseñado para el Año Académico 2011 el desarrollo de tres Diplomas de Especialización y tres Cursos de Especialización que serán dictados en la ciudad de Lima.

Estos programas académicos están dirigidos a profesionales que se desempeñan en las distintas áreas del Derecho, tales como la judicatura, la docencia universitaria y el litigio. Su principal objetivo es difundir la doctrina constitucional y la defensa de los derechos fundamentales.

A continuación presentamos "El calendario de actividades académicas del CEC", el cual se inicia en el mes de marzo. Asimismo, con la finalidad de conocer los últimos eventos académicos programados, pueden visitar la página del CEC ([www.cec.tc.gob.pe](http://www.cec.tc.gob.pe)).

### Cronograma de actividades del CEC para el año académico 2011

Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Fecha de Realización
-------------------	------------------------	----------------------

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN (3)	"Teoría de la Argumentación Jurídica e Interpretación de los Derechos Fundamentales" (50 vacantes)	MARZO-JUNIO (120 horas lectivas)
	"Derecho Procesal Constitucional" (50 vacantes)	JUNIO-SEPTIEMBRE (120 horas lectivas)
	"Proceso y Constitución" (50 vacantes)	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE (120 horas lectivas)

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN (3)	"Los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional" (50 vacantes)	MAYO (1 mes, 10 sesiones académicas)
	"Los Derechos Previsionales en la Jurisdicción del Tribunal Constitucional" (50 vacantes)	JULIO (1 mes, 10 sesiones académicas)
	"Derechos Fundamentales, Proceso Penal y Control Constitucional" (50 vacantes)	SEPTIEMBRE (1 mes, 10 sesiones académicas)







## Jurisprudencia constitucional

### Deniegan pedido de ex integrante del grupo "Colina" para que Vocales de la Sala que lo juzga se inhiban del proceso

Mediante sentencia recaída en el Expediente N.º 02893-2010-PHC/TC, el Tribunal Constitucional resolvió declarar infundada la demanda de hábeas corpus formulada por don Wilmer Yarielqui Ordóñez, contra los integrantes de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima que preside la Vocel Inés Villa Bonilla y a los vocales de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por no haberse acreditado la amenaza cierta y de inminente afectación al derecho a la libertad personal del demandante.

El objeto de la demanda era que en sede constitucional se disponga que las vocales superiores emplazadas se inhiban del conocimiento del Proceso Penal N.º 28-2001 (casos Barrios Altos, Desaparecidos del Santa y Pedro Yauri) en lo que respecta al actor o, en su defecto, se disponga que se admita a trámite la recusación planteada en contra de las demandadas toda vez que su actuación genera peligro a su derecho a la libertad personal.

En cuanto a que la amenaza debe ser inminente y real se debe advertir que los procesos constitucionales no solo buscan remediar las violaciones de los derechos ya producidos, sino que también buscan prevenir la comisión de tales actos. Para determinar si la amenaza de un derecho es inminente hay que establecer, en primer lugar, la diferencia entre actos futuros remotos y actos futuros inminentes. Los primeros son aquellos actos inciertos que pueden o no suceder, mientras que los segundos son los que están próximos a realizarse, es decir, su comisión es casi segura y en un tiempo breve [STC N.º 2484-2006-PHC/TC].

Por consiguiente, la amenaza de afectación del derecho a la libertad personal debe reunir determinadas condiciones: a) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones; y b) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios; condiciones de configuración de la amenaza del derecho de la libertad personal que este Tribunal viene subrayando de su reiterada jurisprudencia [Véase entre otras las sentencias recaídas en los expedientes N.ºs 2435-2002-HC/TC, 2468-2004-HC/TC y 5032-2005-PHC/TC].

En el presente caso este Tribunal advierte que no se configura la amenaza de vulneración al derecho a la libertad individual del actor con el avocamiento por parte de las Vocales Superiores emplazadas en el Proceso Penal N.º 28-2001 que se sigue en su contra. En efecto, la emisión de sentencias anticipadas o de aprobación de los convenios de colaboración eficaz a los coprocesados del demandante no implican la certeza ni la inminencia de que la sentencia a dictarse en su contra vaya a ser condenatoria, lo mismo ocurre con la emisión de las sentencias recaídas en el caso "La Cantuta", esto es así en la medida que conforme a los supuestos hechos acusados en su contra y los respectivos medios probatorios aportados en el Proceso Penal N.º 28-2001 es que la justicia ordinaria determinará su responsabilidad o su inocencia.

## Autoridades administrativas tienen la obligación de resolver todas las solicitudes que reciben

Como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la STC 01292-2004-AA/TC con relación a la motivación de las resoluciones administrativas que imponen sanciones, teniendo como parámetro interpretativo el artículo 139.5 de la Constitución, enfatizando que "el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas contienen sanciones". En la medida que "una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador".

Así lo precisó al declarar fundada la demanda de cumplimiento contenida en el Expediente N.º 05856-2009-AC/TC porque se ha acreditado el incumplimiento de la obligación de resolver por escrito en forma debidamente motivada los recursos administrativos, contenida en el artículo 139.5 de la Constitución y en el inciso 1.2) del artículo IV del Título Preliminar, así como en los artículos 75.6 y 188.4 de la Ley N.º 27444.

Ordenando a la Municipalidad Distrital de Cayma que, en el plazo máximo de 3 días de notificada con la presente sentencia, cumpla con resolver en forma debidamente motivada, bajo responsabilidad, el recurso de apelación de la recurrente, Servicio de Agua Potable y

Alcantarillado de Arequipa S.A. sentencia que, en caso de incumplimiento, deberá ser hecha valer por el juez de ejecución, de oficio, sin mayor requerimiento, y en caso de incumplimiento o inexecución tiene la obligación de imponer las medidas coercitivas previstas en los artículos 22.º y 59.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos correspondientes al proceso.

También ha señalado que el artículo 139.5 de la Constitución y la Ley N.º 27444 resultan ser un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento: obligación de la Administración Pública de resolver por escrito en forma debidamente motivada los recursos administrativos. Esta posición es reafirmada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Como muestra de ello, puede

citarse la STC 01208-2008-PC/TC, en la que se demandó, estimó y ordenó el cumplimiento de los artículos 75.6 y 188.4 de la Ley N.º 27444, es decir, un caso similar al presente.

Consecuentemente, al encontrarse probado en el expediente que la Sociedad demandante, con fecha 11 de octubre de 2005, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia General N.º 609-2005-GAFRC/MDC, de fecha 19 de octubre de 2005, la Municipalidad emplazada tiene la obligación de resolver por escrito en forma debidamente motivada el recurso de apelación mencionado.

## Tribunal Constitucional declara improcedente demanda de hábeas corpus de implicado en caso "Barrios Altos"

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus interpuesta por don Carlos Pachidíngue Guevara, cuyo condenado por el caso "Barrios Altos", señalando que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto el presunto agravio que habría constituido la vulneración a ser juzgado en un plazo razonable habría cesado, pues de de público conocimiento que con fecha 1 de octubre del 2010 la sala emplazada expidió sentencia en el expediente N.º 28-2001, que es el mismo proceso penal que se cuestiona en el presente proceso constitucional, condenando al recurrente a una pena privativa de la libertad. Así lo precisa en la resolución recaída en el Expediente N.º 03707-2010-PHC/TC.

Con fecha 18 de diciembre del 2009 el recurrente interpuso demanda de hábeas corpus contra las vocales integrantes de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, señoras Villa Bonilla Tello Valcarcel de Neco y Piedra Rojas, por vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Refería que después de haberse sobreseído la causa en su contra en el fuero militar, la justicia ordinaria en el año 2001 le inició un proceso penal por los mismos hechos, imputándole los delitos de homicidio culposo, asociación ilícita para delinquir, secuestro agravado y lesiones graves, expediente N.º 28-2001 (caso "Barrios Altos"), por lo que solicita ser excluido del referido proceso en aplicación de los establecido en la sentencia recaída en el Expediente N.º 03509-2009-PHC/TC, caso Walter Gaspar Chacón Málaga. Asimismo, señalaba que las vocales emplazadas, para justificar su detención y dictar sentencia condenatoria, han recurrido a documentos apócrifos como es el denominado "Plan Cijango".

Respecto al cuestionamiento de la utilización de un documento supuestamente apócrifo "Plan Cijango" con el fin de condenar al recurrente, el TC ha señalado en reiterada jurisprudencia que no corresponde al juez constitucional determinar la responsabilidad penal de los procesados ni mucho menos determinar la validez de las pruebas, ya sea de cargo o descargo, que se incorporen en un proceso penal, pues ello sólo corresponde al juez penal.



## Jurisprudencia constitucional relevante

### No procede habeas corpus cuando en el proceso penal no se agotaron los recursos de ley

La Constitución establece expresamente en su artículo 200.º, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados vía este proceso deben necesariamente afectar de manera directa y concreta el derecho a la libertad individual.

No obstante, es menester precisar que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4.º que el proceso constitucional de habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla o cuando habiéndola apelado esté pendiente de pronunciamiento judicial. Así lo precisa el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N.º 03624-2010-PHC/TC que declara improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por don Abner Sánchez Gutiérrez.

En el presente caso, de los actuados y demás instrumentales que corren en el expediente no se acredita que la resolución judicial que impuso el mandato de detención en contra del actor sea firme, esto es que se hayan agotado los recursos que prevé la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría el derecho a la libertad individual, habilitando así su examen constitucional (STC 4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Villar de la Cruz). Por consiguiente, la reclamación de la demanda resulta improcedente en sede constitucional conforme a lo establecido por el artículo 4.º del Código Procesal Constitucional.

El recurrente interpone demanda de habeas corpus contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de

Andahuaylas, don Antonio Salas Calco, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 15 de mayo de 2010, en el extremo que impone mandato de detención en contra del favorecido y que, en consecuencia, se disponga su inmediata excarcelación en la instrucción que se le sigue por el delito de terrorismo agravado (Expediente N.º 2010-0240-0-0302-JR-PE-04). Se alega la vulneración del derecho a la libertad individual.

Al respecto, afirma que el emplazado ha vulnerado el derecho a la libertad individual del actor toda vez que ha dictado mandato de detención en su contra con una aparente motivación en relación con el peligro procesal, presupuesto que se encuentra establecido en el artículo 135.º del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N.º 638). Precisa que el demandado ha justificado la detención en las presunciones criminales de que "el delito y la pena son graves", y que, por lo tanto, el peligro procesal no está debidamente motivado ya que su fundamentación no guarda conexión con algún elemento razonable o proporcional que justifique que el actor entorpecerá la actividad probatoria o el proceso.



### Ordenan reponer a trabajadora al desnaturalizarse contrato

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo, planteada por doña Rita Molina Molina por haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo; en consecuencia, nulo el despido arbitrario de la demandante y en consecuencia ordenó que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto reponga como trabajadora a doña Rita Molina Molina en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en el artículo 22.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso. Esta decisión está contenida en la sentencia expedida en el Expediente N.º 03383-2010-PA/TC.

A fin de determinar la naturaleza de los servicios que prestó la demandante para la emplazada, es preciso aplicar el principio de primacía de la realidad, el cual, como lo ha señalado este Colegiado, es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución. En la STC N.º 01944-2002-AA/TC, se ha precisado que mediante este principio "[...] en caso de discordancia entre lo que ocurre en la

práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos".

Con los contratos de locación de servicios, los recibos por honorarios, el cheque del Banco de la Nación, el Informe N.º 2233-2007-GSC-MPMN, de fecha 15 de octubre de 2007, la copia certificada de la constatación policial, el Memorando Multiple N.º 001-2007-GSGP-GSC-AAG-MPMN-MOQ, de fecha 6 de febrero de 2007, y el rol de servicios de parques y jardines – documento cuya tacha se declaró infundada –, se acredita que la demandante laboró ininterrumpidamente para la emplazada desde el 15 de enero hasta el 30 de junio de 2007.

En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de una relación laboral con la emplazada, la demandante solamente podía ser despedida por causa justa de despido relacionada con su conducta o su desempeño laboral, lo que no ha sucedido en el presente caso, razón por la cual ha sido víctima de un despido arbitrario, vulneratorio de su derecho al trabajo; y, por consiguiente, debe estimarse la demanda.

### No procede desafiliación de jubilados que ya reciben pensiones

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por don Isaac Baltazar Ventosilla por no haberse acreditado la vulneración de su derecho al libre acceso al sistema de pensiones. Así lo señaló en la sentencia recaída en el Expediente N.º 03172-2010-PA/TC.

En el fundamento 37 c) de la STC N.º 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión el derecho al mínimo vital. Asimismo, ha contemplado y comprendido el supuesto en que, a pesar de percibirse una pensión superior, se acredite un grave estado de salud. En el presente caso, a fojas 10 se observa que el demandante padece de neuromiosis, por lo que procede analizar el caso en sede constitucional.

En el presente caso el demandante percibe pensión del Sistema Privado de Pensiones y pretende la inaplicación del artículo 9 de la Ley 28991, con el objeto de retornar al régimen del Decreto Ley 19990.

La Ley 28991, de libre desafiliación, información, pensiones mínima y complementaria, y régimen especial de jubilación anticipada, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2007, fue dictada por el Congreso de la República, atendiendo, casi en su totalidad, a los precedentes vinculantes que en materia de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones este Colegiado estableció en la STC 1776-2004-AA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de febrero de 2007.

Dado que la Ley no incluyó como causal de desafiliación la falta de información, mediante la STC 7281-2006-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de mayo de 2007, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, emitió pronunciamiento respecto a las causales de solicitud de desafiliación, incluida la referida a la falta de información y a la insuficiente o errónea información, y estableció dos precedentes vinculantes; a saber: el primero, sobre la información (Cfr. fundamento 27), y el segundo, sobre las pautas a seguir respecto al procedimiento de desafiliación (Cfr. fundamento 37); además, a través de la Resolución SBS 17118-2008, de diciembre de 2008, se ha aprobado el "Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por la causal de la falta de información, dispuesta por el Tribunal Constitucional, según sentencias recaídas en los Expedientes N.º 1776-2004-AA/TC y 07281-2006-PA/TC".

Así las cosas, este Colegiado declaró la constitucionalidad de la mencionada Ley 28991 en la STC 0014-2007-PI/TC. El artículo 9 de la Ley 28991 establece que la Ley no resulta de aplicación a los afiliados pensionistas. Consta a fojas 43 la boleta de pago de pensión por el monto de S/ 217.17; en consecuencia, no se está vulnerando el derecho constitucional del demandante.



## Jurisprudencia constitucional

### Rechazan hábeas corpus de Fernando Zevallos donde pedía la nulidad de condena

**E**l Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por don Fernando Zevallos González por no haberse aherido la vulneración de los derechos invocados por el recurrente. Así lo señala en la sentencia recaída en el Expediente N° 03365-2010-PHC/TC. El demandante pretendía que se declare la nulidad de la Resolución de la Corte Suprema de la República de fecha 6 de agosto de 2007, alegando que se había afectado el principio de congruencia y el derecho de defensa.

El Tribunal encuentra en el Expediente que el Ministerio Público denunció penalmente a Fernando Zevallos González, "(...) como presunto autor del delito contra la Salud Pública-Tráfico Ilícito de drogas, acopio, transporte, procesamiento, almacenamiento y lavado de dinero en forma de organización (...)". Asimismo, en dicha denuncia se señala expresamente que los tipos penales por los que se encuentra procesado el recurrente son los previstos en los artículos 286°, 297°, inciso 1, 297 B, tipos penales referidos a los delitos contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas.

De otro, en el auto de apertura de instrucción de fecha 16 de enero de 1995, expresa que los hechos descritos y tipificados dentro de los tipos penales dos nueve siete, dos nueve siete inciso primero, abriendo instrucción contra Fernando Zevallos González y señalándolo expresamente como presunto autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas (acopio, transporte, procesamiento, almacenamiento, exportación y lavado de dinero en forma de organización).

De igual modo, el Dictamen N° 213-96, señala que "(...) respecto a Fernando Meléndez Zevallos González, el parte policial N° 143-07-95-DINANDRO-PNP/DINFL (...) concluye que ha quedado fehacientemente demostrado que Zevallos, Mónica Córdova Sánchez y Jhon Mejía Magnani, en un concierto de voluntades utilizaron maliciosamente la empresa AERO CONTINENTE S.A. de propiedad del primer de los nombrados, para introducir en forma sistemática bienes del capital valorados aproximadamente en \$3'500,000 dólares USA (...) lo que se deduce que dicha fortuna proviene del tráfico ilícito de drogas (...)".

La sentencia condenatoria y su confirmatoria, respectivamente son claras. En la primera se le condena a 20 años de pena privativa de libertad, previa explicación de los hechos y del tipo penal en que se encuentran previstos los ilícitos. Por otro lado, la segunda resolución -la cuestionada- expresa fehacientemente las razones por las que consideran que no hay nulidad en la condena en contra del recurrente, expresando que "(...) en el curso del proceso no solo se imputó cargos a Zevallos González como integrante de la organización criminal dirigida por los hermanos López Paredes y con una división de roles en el ámbito propiamente financiero; también se le atribuyó la comercialización de drogas, según se desprende de la Nota de Información Número Trescientos Setenta-DINANDRO-DINT-P.

### Proceso de amparo procede contra normas legales autoaplicativas

**C**on relación a la procedencia del amparo contra normas legales autoaplicativas, el Tribunal Constitucional en la STC N° 01535-2006-PA/TC ha señalado que la procedencia de este instrumento procesal está supeditada a que la norma legal a la cual se le imputa el agravio sobre un derecho fundamental se trate de una norma operativa o denominada también de eficacia inmediata, esto es, aquella cuya aplicabilidad no se encuentre sujeta a la eficacia inmediata de algún acto posterior o a una eventual reglamentación legislativa, en la medida en que adquiere su eficacia plena en el mismo momento en que entra en vigencia; de modo que en tal caso, y siempre que estas normas afecten directamente derechos subjetivos constitucionales, el amparo sí podrá prosperar.

Así lo precisa al declarar infundada la demanda de amparo signada con el N° de Exp. 02042-2010-PA/TC, interpuesta por la empresa de Transportes y Representaciones Turismo Central S.A. contra la Ordenanza Municipal N° 011-2007-MPCP expedida por la municipalidad provincial de Coronel Portillo que dispuso la reubicación de los terminales terrestres de carga y de pasajeros hacia cuatro kilómetros fuera de la ciudad de Pucallpa.

Sobre el particular debe señalarse que la norma cuya inaplicación se pretende es una norma autoaplicativa, pues su efecto es establecer que los terminales de carga y pasajeros que se encuentran en el perímetro urbano de la ciudad deben reubicarse indefectiblemente en el eje de la carretera Federico Basadre, a partir del km. 4, saliendo de la ciudad.

De modo que la disposición contenida en la ordenanza cuestionada tiene una eficacia inmediata en el ordenamiento jurídico, pues no requiere la realización de acto posterior alguno o que se reglamente para que la

conducta en cuestión resulte contraria al ordenamiento. Por ello, la eficacia de la reubicación dispuesta es plena desde el momento en el que la norma adquiere vigencia.

Con las resoluciones en el expediente se acredita que a la empresa recurrente se le concesionaron diversas rutas para el transporte interprovincial de pasajeros. Asimismo, se otorgó la licencia de apertura de establecimiento otorgada a la empresa recurrente para desarrollar la actividad de venta de pasajes y recepción de encomiendas; mas no se evidencian que antes de emitirse la Ordenanza cuestionada se le haya otorgado a la recurrente licencia de apertura de establecimiento para funcionar como terminal terrestre.

Por ello este Colegiado considera que la orden de reubicación del terminal terrestre, así como la posterior denegatoria a la solicitud de licencia de funcionamiento no vulnera derecho constitucional alguno alegado por la recurrente. Además la Ley Orgánica de Municipalidades reconoce a los Municipios, como órganos de gobierno local, la facultad de ordenar el tránsito en su localidad no pudiendo por tanto tenerse como intocables a las licencias que a través de los tiempos han venido otorgándose con la apertura de inmuebles que tanto sirven a los intereses de las empresas destinadas al transporte de pasajeros como a los usuarios de dicho servicio.

En consecuencia, dado que no se han demostrado en autos los supuestos previstos en el artículo 3° del Código Procesal Constitucional para la procedencia de la demanda de autos, cabe entonces desestimarla, considerando que la Municipalidad emplazada, al emitir la ordenanza municipal se incluyó al denegar la licencia de funcionamiento del local de la recurrente, ha actuado en el ejercicio regular de sus funciones, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de Municipalidades.

### Ordenan admitir a trámite demanda de trabajadores de Yanacocha

**E**l Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el recurso de agravio constitucional presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Yanacocha S.R.L. y ordenó al juzgado admitir la demanda presentada, en la cual solicitan dejar sin efecto las cartas de suspensión en sus labores sin goce de remuneración por haber aplicado la medida de paralización convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares del Perú y la reposición en sus puestos de trabajo de los trabajadores que acataron la paralización.

El fallo emitió mediante Resolución recaída en el Expediente N° 02938-2008-PA/TC con las firmas de los magistrados Carlos Mesa, Juan Vergara, Fernando Calle y Oscar Urviola sustentando su decisión en lo manifestado durante por el TC sobre la dimensión plural o colectiva de la libertad sindical que garantiza la protección colectiva de los trabajadores sindicalizados y una protección especial para los dirigentes sindicales en la medida que estos últimos representan los intereses de los trabajadores. Asimismo, por las diversas denuncias presentadas por el demandante sobre supuestos actos lesivos contra la libertad sindical consideraron estimar el recurso de agravio constitucional.

Sin embargo, la presente resolución tuvo el voto singular de los magistrados Ricardo Beaumont, Gerardo Elí y Ernesto Álvarez, los cuales consideraron que la demanda debía ser declarada improcedente debido a que los actos lesivos impugnados por el demandante no tienen relación alguna con el derecho a la libertad sindical alegado sino con la constitucionalidad de la sanción impuesta a los trabajadores que se plegaron a la paralización, por ello dicha controversia puede ser vista en un proceso ordinario siendo esta la vía idónea y no el proceso constitucional de amparo.



## Jurisprudencia constitucional relevante

### Impedimento de salida del país no es la medida más idónea para garantizar el pago de pensión de alimentos

**E**l Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada la demanda de hábeas corpus, formulada por un padre de familia que venía cumpliendo con la pensión alimenticia ordenada, pero que en el proceso civil se le exigía otras garantías sin precisar de manera objetiva cuáles eran esas, con lo que se ha acreditado la vulneración del derecho a la libertad de tránsito; en consecuencia, se declara nula la Resolución emitida por el Segundo Juzgado Especializado de Familia, que confirmó la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja.

Al mismo tiempo se dispuso que el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja resuelva la situación jurídica de don José Antonio Luyo Muchotrigio en el extremo referente al impedimento de salida del país conforme a la sentencia recaída en el Expediente N.º 00213-2010-PHC/TC.

El Tribunal Constitucional considera que se ha vulnerado el derecho constitucional al libre tránsito del demandante, ya que correspondía a la juez evaluar en el proceso de alimentos, una vez emitida la sentencia, medidas menos gravosas pero igualmente satisfactorias y después considerar una medida de impedimento de salida mediante resolución debidamente motivada.

Conforme se aprecia que en el presente caso se mantuvo el impedimento de salida del país contra el demandante, decretado para garantizar el cumplimiento del pago de

asignación anticipada de los alimentos, aún cuando ya existía sentencia estimatoria firme que ordenaba al recurrente abonar el equivalente al 40% de todos sus ingresos, y más aún, cuando su centro de trabajo venía cumpliendo con hacer efectivo el descuento judicial como se había acreditado en el expediente, además de habersele embargado el 50% de su Compensación por Tiempo de Servicio.

El Tribunal Constitucional en la sentencia N.º 04679-2009-PHC/TC señaló que "(...) los órganos jurisdiccionales deben ejercitar los mecanismos adecuados para asegurar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, pudiendo, de ser el caso, emitir incluso una medida de impedimento de salida del país. Sin embargo, dicha medida no puede mantenerse indefinidamente, lo que implicaría una indebida restricción del derecho de libertad de tránsito (...)"

Es así pues que el impedimento de salida del país, en cuanto medida provisional que restringe el derecho al libre tránsito de la persona, establecida mediante resolución jurisdiccional motivada para garantizar el pago de la asignación anticipada de alimentos (medida temporal sobre el fondo), se extingue al emitirse sentencia firme, por lo que no puede pasar a resguardar de pleno derecho al pago de la pensión de alimentaria una vez emitida la sentencia, a menos que se expida una nueva resolución debidamente motivada.

### Confirman que contratos del régimen laboral de exportación de productos no tradicionales son constitucionales

**E**n la sentencia recaída en el Exp. N.º 01148-2010-PA/TC, que desestimó la demanda de amparo interpuesta por doña Justina Huilica de Núñez contra Productos del Sur, el Tribunal Constitucional ha efectuado algunas precisiones sobre la constitucionalidad del régimen laboral especial de exportación de productos no tradicionales previsto en el Decreto Ley N.º 22342, así como de los supuestos en los cuales los contratos de trabajo modales celebrados al amparo de este régimen laboral especial se desnaturalizan.

Los temas mencionados fueron analizados y precisados, por cuanto la pretensión se sustentaba en que los contratos de trabajo modales suscritos al amparo del régimen laboral especial, supuestamente, habían sido desnaturalizados. Sobre la base de dicho alegato, se precisó que:

1. Resulta constitucional que los trabajadores de una empresa exportadora de productos no tradicionales se encuentren sujetos al régimen laboral especial establecido por el Decreto Ley N.º 22342.

Por esta razón, se concluyó que la sola suscripción de un contrato de trabajo sujeto a modalidad bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley N.º 22342 no puede ser considerada como un supuesto de desnaturalización, salvo que se demuestre que la empleadora no es una empresa industrial de exportación no tradicional.

2. Un contrato de trabajo sujeto a modalidad suscrito bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley N.º 22342 se considera desnaturalizado cuando en el no se consigna en forma expresa la causa objetiva determinante de la contratación, que puede ser un contrato de exportación, una orden de compra o un programa de producción de exportación.

Como en el caso de autos, se comprobó que en los contratos de trabajo sujetos a modalidad, se consignaba en forma expresa su duración, así como la causa objetiva por la cual se la contrataba a la demandante, la demanda fue desestimada.



### Amparo contra resoluciones judiciales procede cuando han quedado firmes y agraven la tutela

**C**onforme lo establece el artículo 4.º del Código Procesal Constitucional, el amparo contra resoluciones judiciales procede cuando éstas han quedado firmes y que agraven de manera manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene dicho que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada (STC 2494-2005-AA/TC).

En este sentido, también ha dicho que por "(...) resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se han agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia" (STC 4107-2004-I/TC). Así lo señaló al declarar improcedente la demanda de amparo formulada mediante el expediente N.º 03608-2010-PA/TC.

Como es de verse en el expediente, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Santa declara improcedente la demanda por considerar que la resolución cuestionada no afecta el debido proceso, sino que simplemente declara extinto el derecho de acción por haber transcurrido el plazo.

A su turno la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa confirma la apelada por considerar que lo realmente pretendido por la demandante es el cuestionamiento del pronunciamiento del juez y de la Sala.

De otro lado, se aprecia la resolución judicial que supuestamente le causa agravio al recurrente es la de fecha 14 de enero de 2010, expedida en grado de apelación por la Sala Laboral del Santa, que confirmando la apelada desestimó su demanda de indemnización por daños y perjuicios. Dicha resolución, no fue impugnada a través del recurso de casación ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo establecen sendas ejecutorias supremas.

Entre ellas la Casación N.º 270-2003-Huánuco, la Casación N.º 1659-2003-Piura y la Casación N.º 790-2002-Ica, entre otras, que incorporan la causal de casación por contravención de las normas que garantizan el debido proceso; por el contrario la resolución fue consentida, constituyéndose el recurso de casación de haberse interpuesto en el medio idóneo y eficaz para lograr el fin perseguido por el recurrente.

En consecuencia, siguiendo el criterio expuesto por este Colegiado en el expediente N.º 03951-2008-PA/TC, dicha resolución no tiene la calidad de firme, resultando aplicable lo establecido en el artículo 4.º del Código Procesal Constitucional, que sanciona la improcedencia de la demanda "(...) cuando el agravado dejó consentir la resolución que dice afectarlo". Resolver contrariamente a ello supondría convertir al proceso de amparo contra resoluciones judiciales en un medio para subsanar deficiencias procesales o eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el trámite regular de un proceso judicial, cuestión ésta que la justicia constitucional no debe permitir.



## Doctrina jurisprudencial

## Derecho fundamental a la prueba

A. ¿En qué disposición constitucional se encuentra reconocido y cuáles son sus contenidos?

El derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. El derecho a "interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan alegar algo sobre los hechos", como se emana en el literal "f", numeral 2, del artículo 8.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe ser interpretado conforme a la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución (Expediente 000010-2002-AITC, fundamento 148).

B. ¿Cuáles son los límites a este derecho fundamental?

Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que son armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y lealtad. Estos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inherentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no puedan establecerse otras clases de límites, derivados esta vez de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, siempre que con ellos no se afecte su contenido esencial o, en su caso, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En cualquier caso, la posibilidad de justificar válidamente estos otros límites debe basarse en la necesidad de proteger otros derechos y bienes de la misma clase que aquel que se limita (Expediente 000010-2002-AITC, fundamentos 149 y 150, y 00655-2010-PHC/TC, fundamento 5).

C. ¿Qué exigencias deben contener los medios probatorios?

a) *Pertinencia*: exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto del proceso. b) *Consecuencia o idoneidad*: el legislador debe establecer la necesidad de que determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios. Sería incoherente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinativa vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho. c) *Utilidad*: se presenta cuando contribuye a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad, a aclarar probabilidad o certeza. Sólo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar con él los hechos que pretenden ser probados por la parte; y, cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos peritos con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes. d) *Lealtad*: no pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida, e) *Presunción o eventualidad*: en todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de medios probatorios, pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud probatoria (Expedientes 06712-2005-PHC/TC, fundamento 26 y 00655-2010-PHC/TC, fundamento 5).

## Jurisprudencia comparada

## Tribunal Supremo de Venezuela negó solicitud de suspensión de la Ley de Reforma de la Ley de Aeronáutica Civil

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en ponencia de la magistrada Carmen Zuleta De Merchán, admitió la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por el Procurador del estado Carabobo, Leonel Pérez Méndez, contra "todas y cada una de las normas de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Aeronáutica Civil", publicada en la Gaceta Oficial N.º 39.140 del 17 de marzo de 2009. El magistrado Pedro Rondón Haaz salvó el voto en esta decisión.

Al pronunciarse la Sala sobre la admisión de la demanda de nulidad, constató que la acción no está incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se admitió la demanda, "sin perjuicio de su potestad de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier estado y grado del proceso", indica la sentencia.

En vista de la admisión de la demanda de nulidad, se ordenó, entre otras cosas, citar mediante oficio a la Presidenta de la Asamblea Nacional, así como notificar a la Procuradora General de la República y a la Fiscal General de la República. Además, se ordenó notificar de la presente admisión a la parte demandante.

Sobre la medida cautelar solicitada, constató la Sala que el Procurador del estado Carabobo requirió esta medida para que se "suspendan en su totalidad los efectos de la Ley de Reforma de la Ley de Aeronáutica Civil", y se

ordene "la paralización o inexecución de todo proceso de reversión que el Poder Ejecutivo Nacional haya iniciado pretensa iniciar sobre aeropuertos de uso comercial y de administración estatal".

Indicó la sentencia que los argumentos expuestos por la parte solicitante, relativos a los hechos y al derecho que se invocan "no son suficientes para lograr la convicción respecto de la procedencia de la medida cautelar solicitada, además, esta Sala estima que las pretensiones cautelares de la parte demandante requieren un análisis detenido que sólo podrá hacerse en la sentencia de fondo, razón por la cual esta Sala niega la misma".



Sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

## En Colombia ya no habrán límites para solicitar el divorcio

La Corte Constitucional determinó que ya no operan los límites en el tiempo para que los supuestos deceptados pidan el divorcio de sus parejas cuando se enteren de los hechos que motivan la petición y no cuando se hayan cometido.

El alto tribunal tumbó una norma del Código Civil que ponía como límite de tiempo un año después de cometido el hecho de infidelidad, perversión, drogadicción, entre otros, para poder solicitar el divorcio.

Aclaró que los tiempos de un año sólo operan cuando se pretenden hacer efectivos derechos patrimoniales como en el caso de los alimentos.

"En cualquier momento cualquier persona puede interponer la demanda de divorcio por cualquiera de las causales contenidas en la ley civil solo que si pretende reclamaciones patrimoniales como en el caso de los alimentos sólo podrá hacerlas efectivas un año después del conocimiento del hecho de la infidelidad, perversión o drogadicción del conyugue", explicó el

presidente de la Cortes Constitucional, Mauricio González Cuervo.

Dice el magistrado que una infidelidad cometida hoy puede ser aducida como causal de divorcio dentro de diez, quince o veinte años.



## Informativo Mensual

**DIRECTOR GENERAL**  
Carlos Mesía Ramírez  
Presidente del Tribunal Constitucional

**EDICIÓN Y REDACCIÓN**  
Oficina de Imagen Institucional del  
Tribunal Constitucional

Hecho del Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú  
N.º - 2009-05639  
Colaboradores: Javier Adán, Giancarlo Cresti, Peter Medina  
Diagramación: Mariana Franco  
Coordinación: Henry Rojas  
Año 2. N.º 22, noviembre - diciembre 2010 / Tiraje: 10.000 ejemplares

## Centro de Estudios Constitucionales

### Curso de especialización los derechos previsionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Con el objeto de estudiar los principios constitucionales del sistema previsional peruano y su relación con los derechos fundamentales vinculados al derecho a la pensión; así como analizar el desarrollo de la jurisprudencia constitucional con relación a las distintas manifestaciones del derecho a la pensión y a los regímenes de prestación del mismo que existen en nuestro país, el Centro de Estudios Constitucionales, que dirige el magistrado Gerardo Ito Cruz, organizó el Curso de Especialización "Los derechos previsionales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

Este curso se realizó en diez sesiones académicas y se desarrolló del 26 de noviembre al 17 de diciembre del año en curso en la sede institucional del Centro de Estudios Constitucionales (Calle Los Cedros N° 209, San Isidro).



Local del Centro de Estudios Constitucionales del TC.

### Centro de Estudios Constitucionales presentó buscador de jurisprudencia del TC

El pasado 23 de noviembre el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional (TC) presentó un disco compacto que contiene la "Sistematización de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

La ceremonia de presentación se realizó en la sede del TC y contó con la participación de los magistrados de este Alto Tribunal, así como de los procuradores públicos del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio Público, Justicia Militar, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, los asesores jurídicos de las dependencias públicas, Organismos Constitucionales Autónomos, entre otros.

Este trabajo, que es un valioso aporte electrónico multimedia al servicio de la ciudadanía en general y

El evento académico estuvo dirigido a jueces, fiscales, docentes universitarios y profesionales del Derecho en general.

particularmente para los usuarios jurídicos, estudiantes, operadores jurisdiccionales y profesionales del derecho, ha sido realizado por el Centro de Estudios Constitucionales del TC con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el marco del proyecto "Apoyo en la ejecución del Plan Estratégico del Tribunal Constitucional del Perú 2009-2012".

El trabajo de sistematización contiene la síntesis de las principales sentencias del Tribunal Constitucional, las cuales han sido desarrolladas en fichas que contienen una sumilla, un extracto del fallo, las palabras claves de la sentencia, los derechos constitucionales invocados, las referencias normativas y las concordancias jurisprudenciales nacionales e internacionales.

El documento virtual comprende todos los precedentes vinculantes y las sentencias basadas en procesos de inconstitucionalidad resueltos por el Tribunal Constitucional. Asimismo, las fichas elaboradas, basadas en procesos resueltos (amparos, hábeas corpus, cumplimiento, competencias) y procesos de inconstitucionalidad.

Con este trabajo, de alto nivel técnico y especializado, se busca aportar al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país, promoviendo la transparencia en el sector justicia, impulsando la cultura constitucional en la ciudadanía, constituyendo un valioso avance de la modernidad tecnológica del Tribunal Constitucional.

### Oráculo jurídico



- 1. ¿Qué se entiende por control difuso?**  
La noción control difuso alude al control judicial de constitucionalidad de las leyes como una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar la inaplicabilidad constitucional de la ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que la ley aplicable para resolver una controversia resulta manifiestamente incompatible con la Constitución. (STC 01680-2005-PA/TC, fundamento 2).
- 2. ¿Pueden controlarse constitucionalmente las normas estatutarias de las entidades privadas o corporativo particular?**  
Las normas privadas o particulares que sean contrarias a derechos constitucionales han de ser inaplicadas en ejercicio del control de inaplicabilidad al que habilita el artículo 138°, segundo párrafo, de la Constitución. Todo ello, al margen del control abstracto de dichas normas, que habría de articularse en la vía correspondiente. El Tribunal examina si la norma estatutaria contenida en el estatuto de la asociación es contraria o no a algún derecho fundamental (STC 06730-2006-PA/TC, fundamentos 10-18).
- 3. ¿Puede aplicarse el control difuso en un proceso de amparo?**  
La facultad de controlar la constitucionalidad de las normas con motivo de la resolución de un proceso de amparo constituye un poder-deber por imperativo de lo establecido en el artículo 138°, segundo párrafo de la Constitución. El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Su ejercicio no es un acto simple, en ese sentido, el Tribunal precisa determinadas presupuestos para que el sea válido. (STC 01383-2001-PA/TC, fundamento 16).
- 4. ¿El control difuso presenta límites?**  
El ejercicio del control difuso presenta los siguientes límites: a) debe realizarse en el seno de un caso judicial; b) sólo podrá practicarse siempre que la ley de cuya validez se duda sea relevante para resolver la controversia sometida al juez; c) es preciso que quien plantea al juez la realización del control judicial de constitucionalidad de la ley acredite que su aplicación le ha causado o pueda causarle un agravio directo; y d) el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes tampoco puede realizarse respecto de leyes o normas con rango de ley cuya validez haya sido confirmada por este Tribunal en el seno de un control abstracto de constitucionalidad. (STC 01680-2005-PA/TC, fundamentos 4-9).
- 5. ¿Hay alguna relación entre el derecho de asociación, el control difuso y las normas estatutarias privadas?**  
La potestad normativa de las asociaciones se deriva y se sustenta en el derecho fundamental de asociación. Este Tribunal ya ha tenido ocasión de establecer que "dentro de ese mismo derecho de asociación o, dicho de otro modo, dentro de su contenido constitucionalmente protegido también se encuentra la facultad de que la asociación cree de sede de su propia organización, la cual se manifiesta a través del estatuto. La definitiva potestad normativa de una asociación tiene como fundamento el derecho de asociación, de modo que constituye un atributo constitucional de toda asociación. Desde esta perspectiva debe entenderse que esta potestad no deriva de la facultad dispuesta por el Código Civil y por ello de un ámbito de mera legalidad ordinaria, sino que haya fundamento directo en el derecho fundamental de asociación.  
Aún cuando la potestad normativa privada de la Asociación supone el ejercicio de un derecho fundamental, que viene a ser el derecho de asociación, ello no implica que las normas que proceden de ella se hallen exentas de un control de constitucionalidad cuando resulten contrarias a derechos constitucionales. Por el contrario tal control resulta inescorable en virtud del efecto interpretativo de los derechos constitucionales (STC 02868-2007-PA/TC, fundamentos 6-7).



Dra. Zoraida Ávalos, Fiscal Suprema; magistrado Gerardo Ito, Director del CEC; magistrado Carlos Mesa, presidente del TC y Dr. Mario Solari, Oficial a cargo del Proyecto PNUD.



## Noticias institucionales

### Tribunal Constitucional celebró 28º aniversario de la "Instauración de la Jurisdicción Constitucional en el Perú"

El 19 de noviembre el Tribunal Constitucional (TC) celebró el 28º aniversario de la "Instauración de la Jurisdicción Constitucional en el Perú" (fecha en que se instaló el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1982). Razon por la cual a partir de este año, esta será la fecha de aniversario institucional del TC.

En la ceremonia estuvieron presentes la Fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaiz; los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, doctor Raúl Castro Stagnaro, entre otras distinguidas personalidades del ámbito Judicial, universitarias y Cuerpo Diplomático.

Con ocasión del aniversario del TC, su presidente el magistrado Carlos Mesia, recordó a lo largo de su discurso, la trayectoria del actual Tribunal Constitucional, así como de su antecesor, el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Asimismo, hizo un breve resumen de las recientes sentencias dictadas por este Alto Tribunal; realizó un balance de las labores jurisdiccionales y administrativas realizadas, destacando que de

acuerdo con las proyecciones se puede afirmar que en el mes de febrero del 2011 se podrá alcanzar la meta de carga procesal cero.

Mesia puntualizó que aún queda mucho por hacer en materia jurisdiccional, citando entre ello, algunos temas como las pruebas prohibidas en el proceso penal, la labor de la prensa, la prescripción de las penas en situaciones de contumacia, la eficacia y los efectos del indulto presidencial, la extradición a países que aplican la pena de muerte, la ley de radio y televisión, mal uso de las informaciones y expresión de opiniones en los portales web, libertad religiosa, entre otros.



Discurso del presidente del TC, magistrado Carlos Mesia, durante la ceremonia de aniversario.

### Se inició la transmisión de Audiencias en vivo desde Arequipa donde se vieron 58 procesos constitucionales

Cincuentaiocho procesos constitucionales quedaron al voto luego de tres audiencias públicas de Pleno y Salas realizadas en la ciudad de Arequipa el día martes 16 de noviembre.

Desde las 08:30 horas el Pleno del Tribunal Constitucional que preside el magistrado Carlos Mesia Ramírez dejó al voto 6 expedientes, y a partir de las 10:00 horas la Primera Sala bajo la presidencia del magistrado Gerardo Eto Cruz dejó

al voto 26 procesos. Seguidamente, la Segunda Sala bajo la presidencia del magistrado Juan Vergara Gotelli vió 26 procesos.

La novedad la constituyó el hecho de que por primera vez las Audiencias fueron transmitidas en vivo vía internet, de modo que todo el país y el mundo pudo apreciar estos actos procesables que ratifican la auténtica descentralización de la justicia constitucional.



Magistrados del TC en reunión con presidentes de las Cortes Superiores de Arequipa y Moquegua.

En horas de la tarde, los magistrados del TC sostuvieron una reunión con los presidentes de las Cortes Superiores de Arequipa y de Moquegua con quienes dialogaron sobre los ejes temáticos en torno a los cuales giran las causas procedentes de la macro región Sur teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y a la vez, intercambiaron opiniones y críticas con el propósito de armonizar la defensa de la supremacía constitucional y la defensa de los derechos fundamentales.

### TC eligió a su presidente, vicepresidente y director del Centro de Estudios Constitucionales

El Pleno del Tribunal Constitucional, con la concurrencia de todos los magistrados, eligió el 01 de diciembre al doctor Carlos Mesia Ramírez, como Presidente, como Vicepresidente al doctor Ernesto Álvarez Miranda y Director del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) al doctor Gerardo Eto Cruz. La ceremonia de juramentación se realizará el martes 11 de enero de 2011.



Casa Pilatos, sede del Tribunal Constitucional en Lima.

### Profesora italiana Arianna Vedaschi dictó conferencia

La reconocida profesora italiana doctora Arianna Vedaschi ofreció una conferencia denominada "Modelo Constitucional Italiano" el pasado 02 de diciembre en la Sala de Audiencias del Tribunal Constitucional (TC). Participaron del evento académico los asesores jurisdiccionales y practicantes de este Órgano Constitucional.

El Director del Centro de Estudios Constitucionales del TC, magistrado Gerardo Eto Cruz, tuvo a cargo las palabras de bienvenida que dieron inicio a la conferencia.

La doctora Arianna Vedaschi es profesora en materia de Derecho Constitucional de la Universidad Luigi Bocconi de Milán.



Director del CEC, magistrado Gerardo Eto, junto a la profesora Arianna Vedaschi.